

Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

El Fiscal interino dice: que esta causa se instruyó en el juzgado de Distrito del Estado de México en Julio 17 de 1871 contra Cosme Sanchez y socios, acusados de abusos en las elecciones que debieron verificarse en dicho mes en el Distrito de Tenango; que practicadas varias diligencias, el Juez federal, en 23 de Noviembre último, mandó sobreescribir en la causa, cuyo sobreescribimiento fué confirmado por el Tribunal de Circuito respectivo en 21 de Mayo del presente año.

Los fundamentos del sobreescribimiento, fueron la ley de 27 de Julio de 1872 que concedió amnistía, y la de 13 de Octubre de 1873 que derogó la de 8 de Mayo de 1871.

El que suscribe, considerando arreglado á derecho lo determinado por el Juzgado de Distrito y Tribunal de Circuito referido, pide á la Sala se sirva dar por revisadas estas diligencias, y declarar que no han incurrido en responsabilidad los jueces que intervinieron en ellas.

México, Junio 6 de 1874.—*García Ramírez.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 9 de 1874.—Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívense á su vez el Toca.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Junio 20 de 1874.—*Alejo Gomez Elguarte*, oficial segundo.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México, por la Sra. Dª Petra Carrillo de Orozco, contra los procedimientos del C. Juez 6º de lo civil de esta Capital, en el juicio hipotecario que contra dicha Sra. sigue D. Alejandro Ottaviani, sobre pago de una cantidad de pesos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 2º de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que la Sra. Dª Petra Carrillo viuda de Orozco y vecina de San Angel, interpone el presente recurso de amparo contra los procedimientos del Juez 6º de lo civil de esta Capital, en el juicio ejecutivo que tiene promovido á dicha Sra. D. Alejandro Ottaviani, cuyo estado es, el de rematarse la finca hipotecada con las deducciones de un diez por ciento en cada una de las almonedas, siempre que no se presente licitante alguno.

Estas deducciones son, en concepto de la Sra. quejosa, un ataque al contrato de donde procede la deuda y una aplicacion retroactiva del Código de procedimientos, violándose con tal proceder la garantía consignada en el art. 14 de la Constitucion.

Como en el ocurso se pide á este Juzgado, que en definitiva se le otorgue amparo y proteccion contra la determinacion del Juez 6º de lo civil, el Juzgado decretó en 28 del mes anterior próximo pasado, que dicho Juez 6º informara con justificacion, con arreglo á lo dispuesto en el art. 9º de la ley de 20 de Enero de 1869. Ha cumplido dicho Juez 6º remitiendo el informe, y se ha pasado éste y el recurso de la Sra. Carrillo al que suscribe, quien pasa á encargarse del asunto y pedir lo que en su concepto es, conforme á derecho.

Ninguno de los amparos que se han interpuesto ante este Juzgado, fundándolos en la aplicacion del Código de procedimientos

civiles, á contratos garantizados con hipoteca y celebrados con anterioridad á la publicacion de dicho Código, presenta la especialidad que concurre en el promovido, por la Sra. Carrillo viuda de Orozco.

Segun el informe del Juez 6º de lo civil, dicha Sra. promovió artículo sobre revocacion por contrario imperio del auto en que se citó para el remate de la casa y huerta hipotecada, con deducción de un cuarenta por ciento, resultando que las deducciones de diez, veinte y treinta por ciento anteriores, no habian sido reclamadas por parte de la Sra. Carrillo, cuya aquiescencia respecto de las convocatorias anteriores, demuestra su conformidad en la aplicacion de la ley nueva de procedimientos.

Declarado por el Juez que no procedia la revocacion que se solicitaba, y que en consecuencia debia ejecutarse dicho decreto, fué apelada esta declaratoria por parte de la Sra. Carrillo, cuya apelacion fué admitida únicamente en el efecto devolutivo.

Este recurso no ha continuado ante el Superior, pues ni se ha expensado por la interesada el papel correspondiente para el testimonio con el que debió presentarse al Tribunal Superior dentro del preciso término de tres dias útiles, contados desde la fecha en que se le expidiera dicho testimonio; de consiguiente, el auto interventorio en que se declaró sin lugar la peticion de la Sra. Carrillo, ha pasado en autoridad de cosa Juzgada puesto que el art. 2º de la ley de 18 de Marzo de 1840, vigente respecto de los recursos de denegada apelacion, suplicacion ó nulidad, exige, que dentro del preciso término de tres dias útiles, debe presentarse el interesado al Tribunal Superior, y esta presentacion ha de ser en tiempo y forma, pues de no ser así no puede dicho Tribunal Superior librar su despacho ó compulsorio para que se le remitan los autos ya originales ó ya el testimonio de las constancias, que las partes señalen como conducente á su intencion. Tambien se dispone en el art. 5º de la ley citada, que los inte-

resados pagarán las costas de los testimonios que piden. Se vé pues, que sea por indolencia, descuido ó cálculo de la Sra. deudora, queda ejecutoriado el auto del que interpuso la apelacion.

En tal virtud, puede este Tribunal de Distrito otorgar el amparo que se solicita? Desde luego el que suscribe entiendo, que no está en sus atribuciones decretarlo así, pues esta declaracion equivaldria tanto, como sugerar á su revision determinaciones, ya en el modo de proceder, ya respecto de las decisiones de los jueces del fuero comun, cuando entre ellos han ejercido los interesados los recursos ordinarios que las leyes les conceden, y han quedado firmes y subsistentes tanto unas como las otras.

Res judicata propter publicam judiciorum autoritatem, pro veritate accipitur. Y esta verdad legal no puede invalidarse por una nueva revision, porque ésta no valdría sino en aquellos casos expresamente determinados por las leyes; casos de excepcion que confirman la regla general. La verdad es una, no puede reputarse como tal la que le sea contraria, y si el Juzgado declarara procedente el amparo, incidiria en concepto del Promotor en un absurdo jurídico, puesto que habiéndose ejecutado lo resuelto por el Juez 6º de lo civil en el artículo promovido por la Sra. Carrillo, precisamente sobre si era ó no aplicable el nuevo Código de procedimientos al juicio ante él pendiente, no puede en buenos principios revocarse ni ponerse en duda sus consecuencias.

Si tal llegara á verificarse, se daría un ejemplo de trascendentales y funestas consecuencias; se introduciría una confusion espantosa en el ejercicio de la potestad que las leyes conceden á cada uno de los Tribunales para decidir en la forma que ellas determinan, los negocios que asignan á su jurisdiccion.

La ley de 20 de Enero de 1869, que es la orgánica de los arts. 101 y 102 de la Constitucion, encomendó á los Tribunales de la Federacion el resolver toda controver-

cia que se suscitara por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales, y en el art. 2º se previene, que todos los juicios de que habla el art. 1º en sus fracciones 1ª, 2ª y 3ª, se seguirán por medio de los procedimientos y de las formas del orden jurídico que determina dicha ley. Esto supuesto, la Sra. Carrillo pudo cuando se citó la primera almoneda interponer el recurso de amparo, puesto que según su opinión se la sugetaba á un procedimiento diverso del que convenia á la naturaleza del juicio. Si no lo hizo, ninguna injuria, ningún agravio se le ha inferido, pues que cada cual es libre para renunciar el derecho que cree favorecerle, y esta renuncia está probada por actos que pudiendo reclamarlos la Sra. Carrillo, los dejó consumar, no una sino hasta tres veces; y cuando se citó para la 4ª almoneda, es cuando se introduce un recurso ordinario, ante el mismo Juez que conoce del negocio. Se apela de la decision judicial; se pide certificado de denegada apelacion; se deja ejecutar el auto apelado, y en este estado es cuando se viene interponiendo recurso de amparo por violacion del art. 14 constitucional.

Esta serie de hechos no necesitan comentario, y triste sería que las garantías individuales otorgadas por nuestra Constitución, se convirtieran en amparo de deudores morosos, y en un arbitrio para prolongar los pleitos y eludir indefinidamente el cumplimiento de obligaciones contraídas solemnemente.

No es pues, en concepto del que suscribe, ni jurídico ni conveniente que se paraliquen los procedimientos de la justicia ordinaria, haciendo ilusoria su jurisdicción bajo el espacioso pretexto de un recurso de amparo, como el presente, ni propio de la alta atribución de la Justicia federal, el impartir su protección en casos tan excepcionales como el que nos ocupa.

Por lo expuesto, el Promotor concluye pidiendo al Juzgado, se sirva declarar: que

la Justicia de la Union no protege ni ampara á la Sra. Dª Petra Carrillo viuda de Orozco, contra los procedimientos del Juez 6º de lo civil, en el juicio que ante el sigue D. Alejandro Ottaviani contra dicha Sra. sobre pesos; sin embargo, el Juzgado en su ilustracion resolverá lo que creyere mas conveniente.

México, Abril 7 de 1874.—*J. Biviano Beltran.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Mayo 30 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo interpuesto por la Sra. Dª Petra Carrillo de Orozco, contra los procedimientos del Juzgado 6º de lo civil, en el remate de la finca sita en San Angel y llamada Hotel de San Nicolas, por reputar con ellos violada en su persona la garantía que consigna el art. 14 constitucional; visto el informe de dicho Juzgado 6º; lo pedido por la parte fiscal; y visto en fin lo que debía, y

Considerando: que si bien por regla general en los procedimientos no cabe la retroactividad á que se contrae el art. 14 de la Constitución, esa regla no es aplicable á los casos en que no siendo meros procedimientos, con estos se ataque la naturaleza de un contrato, como acontece en los remates de fincas, que hipotecadas con anterioridad y bajo las leyes vigentes, se les sujeta á las prevenciones hoy vigentes por las que se deben hacer deducciones hasta el diez por ciento de su valor; que en consecuencia, y entendiéndose por retroactividad la aplicación en perjuicio de derechos legítima y anteriormente adquiridos, de ley posterior á hechos anteriores, como acontece en el caso del presente juicio, y sin que pueda alegarse en contra, que al quejoso debe suponersele conforme con los procedimientos para el citado remate, pues sería bastante el considerar efectuada la violación, y con derecho el ofendido á interponer juicio de amparo, la

falta de conformidad expresa en todos y cada uno de los procedimientos de que se queja; por tales consideraciones, se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á D^a Petra Carrillo de Orozco, contra los procedimientos del Juzgado 6^o de lo civil en el remate del hotel llamado de San Nicolas, sito en San Angel, por violarse con ellos la garantía que otorga el art. 14 de la Constitucion.

Hágase saber; publíquese, y previa citacion fiscal, elévense los autos á la superioridad. Lo decretó y firmó el C. Juez 2^o de Distrito, Lic. José M. Canalizo. Doy fé.—*José María Canalizo.*—*Fernando Zamora*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 10 de Junio de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por la Sra. D^a Petra Carrillo de Orozco, ante el Juzgado 2^o de Distrito de esta Capital, contra los procedimientos del C. Juez 6^o de lo civil de esta Capital, en el juicio hipotecario que contra dicha Sra. sigue D. Alejandro Ottaviani, sobre pago de una cantidad de pesos que le reconoce en una finca de su propiedad, sita en San Angel y conocida con el nombre de "Hotel de San Nicolas". Visto el informe producido por el C. Juez 6^o de lo civil, en que manifiesta las razones por las cuales no cree que en el presente caso se hayan violado en la persona de la quejosa las garantías que la Constitucion general de la República reconoce en su artículo 14. Visto el parecer del C. Promotor fiscal; la sentencia del inferior y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente.

Considerando: que tanto la hipoteca constituida en la mencionada finca, como el convenio posterior celebrado por los interesados, tuvieron lugar con anterioridad á la promulgacion del Código de procedimientos civiles.

Que el rebajo del diez por ciento en cada

almoneda que el mismo Código determina, no afecta meramente al procedimiento, sino á la sustancia, perjudicando derechos anteriormente adquiridos.

Que los interesados en esta clase de juicios están en libertad para consentir en lo que crean que les perjudica, así como para no consentir en lo que crean les perjudica, y por tanto no puede alegarse que habiendo consentido en los procedimientos anteriores, hayan consentido en todos.

Que en el presente caso aparece, que siempre protestó la Señora contra tales procedimientos; que con ellos se dá efecto retroactivo al Código novísimo, y contrariada la prevencion del artículo 14 constitucional alegado por la quejosa.

Por estas consideraciones, y con fundamento del expresado artículo, y de los 101 y 102 de la Constitucion, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez 2^o de Distrito de esta Capital dictada con fecha 30 de Mayo próximo pasado, en que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege á la Sra. D^a Petra Carrillo de Orozco, contra los procedimientos del C. Juez 6^o de lo civil en el remate del Hotel llamado de "San Nicolas" sito en San Angel.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 22 de 1874.—*Lic. Emilio Pardo*, oficial mayor interino.